

Así será 'arsenal legal' contra el terrorismo

Cuando el Congreso apruebe el proyecto, la Corte Constitucional tendrá dos meses para revisar la legalidad de los cambios realizados a cuatro artículos de la Carta Política. Mal uso de las facultades tiene graves consecuencias disciplinarias y penales.

Redacción de El País

Bogotá. La recusación a un grupo de representantes a la Cámara parece ser el último escollo que tendrá que superar el Estatuto Antiterrorista, para convertirse en una realidad legal en Colombia.

La situación será resuelta a más tardar la próxima semana y no amenaza en realidad el trámite del proyecto de reglamentación del Estatuto, que en todo caso deberá ser resuelto por el Congreso antes del 20 de julio próximo. En el evento contrario, según quedó estipulado en la ley aprobada por el Congreso el año pasado, el propio Gobierno sería el encargado de reglamentar el uso de las facultades especiales a la Fuerza Pública para enfrentar el terrorismo.

La norma, que entrará en vigencia una vez la Corte Constitucional realice su revisión, en un plazo máximo de dos meses, modificó los artículos 15, 24, 28 y 250, así:

El nuevo artículo 15 constitucional permite interceptar o registrar cualquier tipo de correspondencia privada sin orden judicial. El 24 creó el llamado empadronamiento (Informe de Residencia).

El artículo 28 permite las detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial, mientras el 250 ordena a la Fiscalía General conformar Unidades Especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares para que actúen en sitios donde no existe ninguna autoridad judicial.

Las nuevas facultades tendrán vigencia hasta el 2006, pero podrán ser prorrogadas. Estas son sus características más importantes:

1. ¿Cuáles es el objetivo del Estatuto Antiterrorista?

Dotar al Estado de herramientas jurídicas para prevenir la comisión de actos terroristas, designar a las autoridades encargadas de aplicar esos instrumentos y regular la forma y condiciones para prevenir la acción de los terroristas.

Pero las nuevas facultades sólo operan, sin orden judicial, cuando existen "serios motivos" basados en informes de inteligencia que descrean credibilidad. La sola sospecha no constituye "serios motivos".

2. ¿Quiénes podrán aplicar estas herramientas?

Sin previa orden judicial, pueden realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control de legalidad, los siguientes autoridades: comandantes de Fuerza, de divisiones y de brigadas; comandantes de departamentos de Policía y de Policías Metropolitanas; directores de Policía Judicial, de Inteligencia de la Policía y Operativo de la Policía Nacional, y de Seguridad DAS y sus seccionales. Igualmente, pueden interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin orden judicial: Comandante General de las Fuerzas Militares; directores de Inteligencia del DAS, Digna, de Inteligencia de la Policía y del Comandante General de las FRMM.

Las labores de Policía Judicial, hasta ahora reservadas al CTI y la Policía, podrán ser ejercidas por los miembros de las Fuerzas Militares, de acuerdo con la reforma.

2001/12/10

el dato clave

El Estatuto Antiterrorista otorga a las autoridades policiales, militares y de inteligencia facultades especiales para interceptar o registrar la correspondencia privada, detener, allanar y registrar domicilios, y empadronar a los habitantes de zonas de riesgo.

3. ¿Se aplicarán indiscriminadamente para todos los delitos?

No. Son reglas pensadas y aplicables sólo para prevenir el terrorismo. El uso de facultades en casos no autorizados o por autoridades sin la debida competencia será considerado falta gravísima y tiene además implicaciones legales y penales.

4. ¿Cómo se ejercen las facultades de Policía Judicial?

Mediante autorización escrita que será ejecutada por unidades especiales de Policía Judicial. Donde no existan, la Fiscalía asignará una unidad de Policía Judicial para acompañar a las Fuerzas Militares.

5. ¿Qué facultades tendrán esas unidades especiales?

No tienen carácter permanente, no podrán realizar investigaciones de ningún delito y se regirán por las normas del Código de Procedimiento Penal y del Manual de Policía. La orden debe contener: los serios motivos, identificación de la autoridad que la ejerce, fecha, nombre, firma y documento de identidad del funcionario que lo expide, y el lugar o lugares en donde debe cumplirse.

6. ¿En qué consiste el control de legalidad?

Las personas capturadas y todo lo actuado pasarán a disposición del fiscal o juez de legalidad dentro de las 24 horas siguientes. De no hacerse, el fiscal o juez de control de legalidad actuará de oficio dentro de las 24 horas siguientes. Todo procedimiento debe sujetarse a las formalidades y requisitos del Código de Procedimiento Penal y el Manual de Policía Judicial.

7. ¿Hay control disciplinario?

Lo ejerce la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con

Recusaciones, la próxima semana

La presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara, María Isabel Urrutia, considera que el estudio de las recusaciones puede esperar hasta el lunes próximo.

Según el vicepresidente de la Comisión de Ética, representante Carlos Roldán Chavarrín, hasta el momento se encuentran en la lista de recusados 26 de sus compañeros de la Cámara, quienes tienen grados como oficiales de la reserva. Inicialmente, la presidenta de esa comisión, María Isabel Urrutia, citó el debate para el lunes a

las 3:00 p.m., con el fin de resolver la situación de sus colegas. El representante Chavarrín dijo que la citación realizada por Urrutia es extemporánea, porque la Comisión tiene tres días hábiles, que se cumplen el viernes. "Incluso podríamos ser investigados por presunción por omisión", señaló.

lo remitió por el fiscal o juez de control de legalidad, aunque el Ministerio Público puede acusar por solicitud de la afectado o de oficio. Los miembros de las Fuerzas Militares comprometidos en abusos serán separados del cargo mientras se investiga.

8. ¿En qué casos se necesita una orden escrita?

Para interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada; realizar capturas o detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin orden judicial previa. Si la diligencia debe hacerse de noche, la orden debe ir motivada.

9. ¿Habrá limitaciones al ejercicio de la prensa?

No. Las propuestas en ese sentido fueron eliminadas. El Estatuto respalda el ejercicio de la actividad periodística tal como lo consagran los artículos 73 y 20 de la Constitución. Protege el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes.

10. ¿Habrá control del Congreso?

El Ministerio del Interior y de Justicia debe rendir al Congreso ante las plenarias de Cámara y Senado, por separado, un informe sobre el uso de las nuevas facultades, al iniciar cada período de sesiones. Allí deben detallarse: relación de personas y bienes afectados, procedimientos utilizados y motivaciones que originaron el procedimiento contra el terrorismo. Un informe similar debe entregar cada trimestre a las comisiones primeras y segundas de Senado y Cámara.

11. ¿Qué es el "empadronamiento"?

Es un Informe de Residencia que debe llevarse en las zonas del país que el Gobierno considere convenientes, o en todo el territorio nacional. Es obligatorio cumplimiento para sus habitantes, pero no habrá sanciones diferentes a la obligación de comparecer, según la última ponencia que se estudia en Cámara.

12. ¿Quién certifica el empadronamiento?

Lo aprobado hasta ahora señala que el Gobierno expide una certificación que es de obligatoria presentación cuando lo soliciten las autoridades; para obtener y renovar la expedición del pasaporte; para celebrar contratos con cualquier entidad pública; para tomar posesión en cargos públicos; para obtener o renovar la licencia de conducción; para vincularse al sistema de seguridad social y para obtener salvoconducto para el porte y tenencia de armas de fuego. La última ponencia eliminaba la obligación de presentar el certificado para esos trámites.

13. ¿Qué datos contiene ese registro?

Nombre y apellidos, sexo, lugar de residencia, hábitos y los lugares a los cuales se desplaza con cierta frecuencia, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, documento de identidad, nivel de escolaridad, información sobre el núcleo familiar, profesión u oficio del declarante y de su núcleo familiar y lugar de trabajo. De ser necesario, las autoridades podrán tomar registros fotográficos y dactiloscópicos del declarante.